

Colombia

¿Podría la decisión de la Corte tumbar fallos de la Sala Disciplinaria?

Al llamar 'exmagistrados' a dos integrantes de esta sala puso en duda la legitimidad de lo que ellos han decidido en cuatro años.

REDACCIÓN JUSTICIA · EL TIEMPO | @JusticiaET | justicia@eltiempo.com

La dura providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se negó a cumplir una orden que le dio la Sala Disciplinaria de la Judicatura, porque consideró que dos de los jueces que la firmaron -Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria- no son magistrados desde hace cuatro años, causó todo un revuelo y puso en duda la legitimidad de las decisiones que ellos han tomado en ese tiempo.

Según la Corte, como los periodos de los magistrados son de ocho años y ellos culminaron esa etapa en el 2016, ya no pueden tomar decisiones. Incluso, le pidió a la Fiscalía que los investigue por seguir ejerciendo estas funciones.

Al ser consultada por EL TIEMPO, Garzón se defendió y dijo que la Corte fue "ligeramente" porque no tuvo en cuenta el Acto Legislativo 02 del 2015, llamado ley de equilibrio de poderes, que ordenó crear la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para reemplazar, desde 2016, a la Sala Disciplinaria. Según Garzón, como la comisión no ha sido conformada, ellos siguieron en el cargo, pues la ley estableció una transición según la cual podían seguir en funciones hasta que se posesionaran los magistrados de la comisión.

También afirmó que luego de que la Corte Constitucional les comunicó un fallo en el que dijo que un periodo superior a los 8 años es inconstitucional (pues no puede tener prórrogas), le presentaron su renuncia al Congreso el pasado 21 de septiembre, pero no han sido aceptada (ver recuadro).

Garzón afirma que en estos últimos cuatro años han tomado varias decisiones que no han sido cuestionadas, incluso sobre fallos de la Corte Suprema, por lo cual le causa "extrañeza" que solo hasta ahora el alto tribunal los desconozca como magistrados. Así, conside-

ra que sus fallos en la Judicatura no pueden ser ilegítimos.

Pero no piensa lo mismo el presidente del Colegio de Abogados Penales, Francisco Bernate, quien asegura que con el auto de la Corte queda claro que en estos cuatro años, las decisiones de la Sala Disciplinaria en las que Garzón y Sanabria participaron "como magistrados ponentes carecen de toda validez jurídica". Tampoco tendrían validez, dijo, las decisiones que ellos votaron a favor, pero que tuvieron salvamentos de voto de otros de sus compañeros.

Las únicas decisiones que según Bernate quedarían en pie son aquellas en las que Sanabria y Garzón no fueron ponentes, y en las que su voto no fue determinante.

En todo caso, esas decisiones han sido tomadas por los magistrados restantes de la Sala Disciplinaria que Sanabria y Garzón nombraron como sus compañeros interi-

Tropiezos del congreso pleno

La complejidad que implica la convocatoria de un congreso pleno ha hecho que, hasta el momento, las renuncias de algunos magistrados de la Judicatura no se hayan podido tramitar.

Así lo estableció EL TIEMPO con fuentes del Congreso, las cuales explicaron que la pandemia y las indicaciones de la administradora de riesgos laborales (ARL) sobre las medidas de protección que deben adoptarse en el Capitolio han imposibilitado la reunión. Una de las posibilidades que se analizan es que en la misma sesión del congreso pleno en la que se elegiría a los nuevos integrantes de la Comisión de Disciplina Judicial se tramiten las renuncias de los actuales togados. En este sentido, el Congreso todavía está esperando las ternas para hacer esta elección.

nos, lo cual también deja en duda esos nombramientos.

Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Externado Camilo Burbano, si la tesis de la Corte es cierta, y si se acepta que ellos dos dejaron de ser magistrados desde el 2016, "sus actuaciones en este periodo de tiempo estarían viciadas de nulidad". Esto implicaría, dijo, que se tendrían que revisar todas las sentencias y actos jurisdiccionales que ellos hayan emitido en estos cuatro años, "porque fueron emitidos por quien precisamente no tiene facultad".

Esa posibilidad, asegura, sería gravísima, teniendo en cuenta las funciones de esta Sala. Es la que disciplina a jueces, abogados y fiscales, resuelve conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y militar, y hasta decide sobre tutelas, como la que resolvió Garzón hace apenas tres semanas, cuando ordenó apartar al magistrado que llevaba en la Corte el proceso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, por 'parapolítica'.

En cambio, el penalista Andrés Felipe Peláez Reyes asegura que Sanabria y Garzón sí podían seguir en el cargo por la transición que estableció la ley de equilibrio de poderes para la creación de la Comisión de Disciplina Judicial.

Por eso, no cree que automáticamente, por el hecho de que la Corte los llame "exmagistrados", sus fallos pierdan efectos jurídicos, pues esa transición que trajo la ley hace que sus decisiones "deban presumirse legales".

De otro lado, Peláez dice que la afirmación de la Corte, aunque es contundente, "solo tiene efectos para que se inicie una investigación, ya que entre las altas cortes no existe una jerarquía".

Chapinero firma acuerdo para proteger a animales



Fotonoticia

LOS ANIMALES FUERON PROTAGONISTAS de la 'firma' del acuerdo 002 de 2020, de la alcaldía local de Chapinero, en Bogotá. Según esta disposición, se invertirán \$ 1.600 millones para atender a unos 8.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. También se invitó a los ciudadanos a postularse para integrar el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. FOTO: CÉSAR MELGAREJO. EL TIEMPO

Iniciativas para volver una oportunidad la migración venezolana

ALCALDES FRONTERIZOS Y EXPERTOS LANZARON PROPUESTAS FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA. CIUDADANOS DEL PAÍS VECINO EN COLOMBIA YA SE ACERCAN A LOS DOS MILLONES. LA MAYORÍA SON IRREGULARES.

Colombia enfrenta actualmente el fenómeno migratorio más grave de la región, como consecuencia de la crisis venezolana. Según cifras de Migración Colombia, en el país residen actualmente 1.731.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales cerca de 931.000 se encuentran de manera ilegal. No obstante, según la misma entidad, el 28 por ciento de esta población está entre los 18 y los 35 años, es decir, están en plena edad productiva. ¿Cómo convertir esto en una oportunidad?

Resolver este interrogante fue uno de los puntos centrales del foro 'Impactos de la migración: los retos de las ciudades capitales', organizado por Asocapitales, la Universidad del Rosario y EL TIEMPO.

En el encuentro, en el que intervinieron mandatarios locales y expertos, los panelistas coincidieron en que el trabajo no es frenar la migración, sino encontrar alternativas de desarrollo con esta población.

"Un migrante que está en condición regular es una persona que aporta al sistema de salud, que aporta a las finanzas del Estado, que aporta al desarrollo", aseguró Francesca Ramos, directora del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Copar espacios

En esto coincidió el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien aseguró que la apuesta del Gobierno es generar incentivos que lleven a la regularización de los migrantes.

"Estamos adelantando la identificación biométrica que nos permitirá conocer las habilidades de los migrantes, pues esta es una población llamada a copar espacios que típicamente no copan los pobladores del país, tenemos, por ejemplo, un déficit de personas para call center con bilingüismo, tenemos un déficit en el tema médico", dijo Espinosa.

En el segundo panel, que estuvo integrado por alcaldes de ciudades capitales, quedó claro que, si bien hay proyectos para la inclusión de los migrantes en lo local, se necesita apoyo del Gobierno.

Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, la ciudad del país que más fuertemente recibe el impacto de la migración, le pidió al Gobierno más apoyo económico y normativo. Llamó a que se establezca un régimen especial para los municipios de frontera.

"La generación de empleo no se hace por decreto. Necesitamos mucha coordinación con Asocapitales y promover inversiones estratégicas, detrás del empleo vienen el emprendimiento y la educación. Se requiere un régimen especial para los municipios de frontera", indicó Yáñez.

Ese punto fue apoyado por el alcalde de Pasto, Germán Chamorro, quien no obstante señaló que, más que un régimen especial, "se requiere una nueva ley de fronteras".

El presidente de Asocapitales, el alcalde Carlos Mario Marín, anunció que desde la asociación se está preparando un documento que será entregado al Gobierno Nacional, al tiempo que insistió en la necesidad de la descentralización.

"Las capitales necesitan reforzar la creación de empleos locales y por esa razón es mejor la descentralización de los recursos para la atención del problema", manifestó Marín.

'Hubo intereses políticos de Andrade en la adición Ocaña-Gamarra'

Tras la adjudicación irregular de la vía Ocaña-Gamarra no solo hubo intereses económicos, sino también políticos. Así lo señaló el miércoles la Fiscalía, durante el inicio de juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade.

En medio de la extensa exposición de la teoría del caso que hizo el ente acusador, durante más de dos horas, el fiscal dijo que una de las motivaciones de Andrade para participar en las irregularidades, que hacen parte del caso Odebrecht, era la posibilidad de lograr "una posición en el medio político, con posiciones a futuro" para llegar al Ministerio de Transporte "con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Aquí se identificó entonces un interés político".

Y luego señaló sobre las motivaciones: "Autorizar una adición a una megavía que sirvió para dar el visto bueno para que se adelantara la financiación de la campaña política de reelección Santos 2014-2018".

Indicó que el senador Bernardo Elías Vidal también tenía el interés en la obra y el pago de sobornos para financiar su campaña política con el dinero de Odebrecht. Igualmente señaló que el exsenador Otto Bula tenía el objetivo de cumplirle a la multinacional del Brasil para que le transfirieran los recursos acordados por sus gestiones.

En ese mismo sentido, dijo el fiscal, se interesó el empresario Federico Gaviria para recibir pagos de Odebrecht, así como el exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa, ahora testigo contra Andrade, y quien hizo parte de las reuniones en las que se habló de la obra.

El fiscal añadió que en el juicio demostrará esas motivaciones, y agregó: "Fueron varios los intereses encontrados a través de la prueba".

El abogado Héctor Hernando Escobar, defensor de Andrade, señaló que la Fiscalía no va a poder probar la teoría de su caso, y cuestionó que el ente acusador incluyó evidencias que no podrá usar en el juicio. Añadió que su cliente no incurrió en irregularidades y que la multinacional Odebrecht logró llegar a funcionarios de la ANI como Juan Sebastián Correa, testigo contra Andrade, pero no al director de la entidad.

Justicia@eltiempo.com